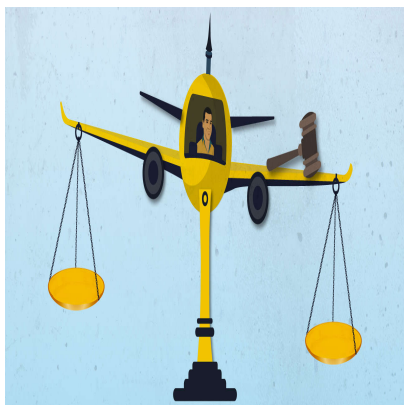




El â??consigliereâ?? que inclina la balanza del Tribunal Supremo

Descripci3n

Era enero de 2012 y el equipo campe3n del baloncesto profesional de Venezuela, Marinos de Oriente, se disponÃa a presentar a sus nuevos directivos. La franquicia tenÃa un nuevo dueÃo: [Carlos Alberto Silva Caraballo](#), un exlanzador que complet3 nueve temporadas en las Grandes Ligas del bÃisbol de Estados Unidos. Entre los rostros que quedaron ese dÃa retratados en la prensa como asistentes al evento, despuntaron los de dos abogados y amigos cuya influencia mancomunada pronto iba a superar el Ãmbito deportivo y que, en pocos aÃos, lograrÃan controlar buena parte del poder judicial venezolano: uno era el de Tarek William Saab, entonces gobernador del estado AnzoÃtegui - sede del equipo, sobre la costa nororiental del paÃs-, quien lucÃa una camisa polo amarilla, cruzada por rayas blancas, con unos grandes lentes oscuros; y el otro era el nuevo presidente de la organizaci3n, Gustavo Ernesto Mendiri Borges, quien apareci3 con una camisa manga larga de tela azul marino.

Hoy los dos amigos representan dos caras distintas, pero complementarias, de un sistema de justicia sobre el que pesa la acusaci3n de cometer crÃmenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Saab es el todopoderoso Fiscal General de la RepÃblica, designado por la Ãrbita Asamblea Nacional Constituyente de 2017, mientras Mendiri es un conocido cabildero, una especie de *consigliere*, con capacidad para inclinar la balanza del mÃximo tribunal del paÃs a d3nde le sea mÃis conveniente a sus amigos o al mejor postor.

La figura de las llamadas *tribus judiciales* ha sido muy recurrida para describir a los diferentes grupos de poder que conviven o se enfrentan en el sistema de justicia venezolano, sobre todo a raz de la aniquilaci3n de la independencia del Poder Judicial que ejecut3 la autodenominada Revoluci3n Bolivariana. Hace nada mÃis un aÃo, por ejemplo, el propio diputado chavista, Pedro CarreÃo, no tuvo reparos en referirse a las â??[magistradas 33 y 34](#)â? del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) - antes de la reforma de la Ley OrgÃnica del Tribunal que redujo el nÃmero de magistrados [de 32 a 20](#) -, para aludir a la influencia que entonces habrÃan tenido unas abogadas externas, Solchy Delgado y Evelyn Mendoza, en las decisiones de los tribunales penales de Caracas.

Un aÃo y medio despuÃs de aquella pretendida reforma, que prometÃa eliminar el trÃfico de influencias dentro del TSJ, lo Ãnico que parece haber cambiado son los nombres de los caciques de

las tribus y de sus influenciadores. Entre todos ellos, destaca Gustavo Mendiri, el mismo abogado que hace más de una década se daba a conocer como presidente de Marinos.

Cuatro fuentes del Poder Judicial, que solicitaron la reserva de sus nombres por temor a represalias, indicaron, cada una por su cuenta, que el abogado de 42 años de edad se ha valido de su amistad con Tarek William Saab para reclutar a fiscales y jueces que han pasado a formar parte de su clan particular. "Es un operador, un mercenario, que maneja el tráfico de influencias dentro del TSJ", indicó una de las fuentes.

Como se viene relatando, la vida pública de Mendiri se inició en la gerencia deportiva. Las primeras notas periodísticas que hablan de su labor en esta área se remontan a 2008. Con tan sólo 27 años de edad, el Flaco Mendiri, como se le apoda, ya se desempeñaba como gerente de operaciones del equipo de béisbol Caribes de Anzoátegui. Luego vino una seguidilla de puestos gerenciales en organizaciones deportivas como el también equipo de baloncesto Guaikeranes de Margarita, o el equipo de fútbol profesional Monagas Sport Club. En 2013 ingresó como tesorero de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), en cuya directiva se mantuvo hasta 2019.

Estas gestiones deportivas le sirvieron de trampolín para saltar a la política y frecuentar el alto poder judicial. Es así como se le ve en fotos junto a Aristóbulo Istúriz, el ahora fallecido dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que reemplazó a Tarek William Saab en la gobernación, o con el exalcalde del municipio Pedro María Freites de Anzoátegui, Daniel Florencio Haro Méndez (PSUV), conocido como el [Rey de la Chatarra](#) y que fue arrestado en febrero de 2022 bajo acusaciones de estar involucrado en el contrabando de combustible. Haro Méndez también fue miembro de aquella junta directiva de Marinos, presidida por Mendiri y endosada por Saab. El exalcalde fue [liberado](#) dos meses después de su detención por el juez [José Mascimino Márquez](#), arrestado en marzo de este año bajo acusaciones de corrupción.

Tras el nombramiento de Saab como fiscal del chavismo en 2017, Mendiri logró adentrarse en las más altas esferas del poder judicial. El éxito de sus gestiones en la corte radica en su articulación con los asistentes de los magistrados de dos salas clave del TSJ: la Sala Civil y la Sala Constitucional. La primera maneja casos que pueden involucrar altas sumas de dinero, como demandas de compañías, herencias o sucesiones, mientras que la segunda tiene la potestad, cuestionada por [algunos juristas](#), de revisar las decisiones definitivamente firmes de las otras salas.

Los asistentes de los magistrados, por su parte, manejan información privilegiada como los proyectos de decisiones. En estos casos las gestiones de Mendiri han pasado a través de la abogada Veira Josefina Lozada de Caro, asistente de la presidente del Tribunal, Gladys Gutiérrez, y el coronel Jesús Arnoldo Rosales Castro, exconsultor jurídico del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceonfanb) y, hasta hace poco, asistente del presidente de la Sala de Casación Civil y segundo vicepresidente del TSJ, Henry José Timaure Tapia.

Una decisión de esta última sala ha resaltado la red de manejos que Mendiri mantiene dentro del TSJ. La sentencia, fechada el 3 de noviembre de 2022, de la que Timaure Tapia fue ponente, favoreció a la aerolínea Rutas Aéreas, C.A. (Rutaca) en una demanda por el cobro de una deuda de dos millones de dólares que la compañía mantiene con el empresario Julio César Cuesta Eisler.

La decisión inmediatamente levantó suspicacia dentro de los pasillos judiciales, pues a Rutaca, fundada hace casi 50 años en el sureño estado Bolívar, la adquirió el pelotero Carlos Silva Caraballo en aquel 2012 en el que presentaba a su "hermano" Mendi, como lo llamó en una entrevista publicada en el diario [El Universal](#), como presidente de su equipo de baloncesto. "La idea de comprar a Marinos nació de [Mendi]", reconoció el ex lanzador en la misma entrevista.

Un conflicto de influencia

El 12 de abril de 2021, después de una larga batalla judicial, los representantes legales de Cuesta Eisler consiguieron que un Tribunal de Primera Instancia de Bolívar, a cargo de Soraya Charbone Pérez, ordenara a Rutaca pagar los dos millones de dólares al empresario, incluyendo los intereses moratorios, así como los costos del proceso judicial de la parte favorecida. Antes del dictamen, el tribunal ordenó el embargo preventivo de dos hangares de la empresa en el aeropuerto de Ciudad Bolívar, la capital del estado, así como de dos aeronaves Boeing 737, con la finalidad de garantizar el eventual pago de la deuda.

La aerolínea había evitado pagar este compromiso durante más de 10 años, periodo en el que llegó a cambiar de dueños. De acuerdo con la versión de Cuesta Eisler, recogida en varias [decisiones judiciales](#), todo empezó en 2005 cuando el entonces presidente de Rutaca, Eugenio Molina Anaya, le ofreció en venta una aeronave de la empresa por 2,5 millones de dólares. El acuerdo al que llegaron ambos, siempre según la versión de Cuesta Eisler, fue que el empresario iría haciendo pagos paulatinos y que al momento de alcanzar 65% del monto total- es decir, 1,6 millones de dólares- el avión sería entregado a Cuesta.

Sin embargo, en 2010, aunque Cuesta ya había completado pagos por 1,84 millones de dólares, no había recibido la aeronave. Entonces consiguió negociar un nuevo acuerdo con los deudores, por el que el monto hasta entonces desembolsado se convertiría en un "préstamo para la adquisición de bienes y servicios" de la aerolínea. El 30 de enero de 2018 se firmó un nuevo compromiso por el que la deuda fue cedida al nuevo dueño de Rutaca, Carlos Silva, quien tampoco ha cumplido con el pago.

Pero la sentencia favorable a Cuesta en 2021, y su ratificación el 8 de octubre de ese año por otro juzgado superior del estado Bolívar, abrieron una oportunidad para activar una maniobra de influencia de Mendi en el TSJ para favorecer a su amigo Silva Caraballo. Para la ocasión, los representantes jurídicos de Rutaca introdujeron un recurso extraordinario ante la Sala de Casación Civil, con la finalidad de que la sentencia fuera anulada.

La distribución del expediente aterrizó en el despacho más favorable para la aerolínea, esto es, al alcance de la influencia de Mendi: el del ya mencionado Henry José Timaure Tapia, designado como ponente. Timaure es un general retirado que se graduó en la misma promoción militar que el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, hasta hace poco tenido como el "número dos" del chavismo y cabecilla de su ala militar-desarrollista. En la sentencia, que redactó Timaure, con fecha del 3 de noviembre de 2022, la Sala declaró con lugar el recurso de Rutaca, con el argumento de que no había un documento que comprobara la deuda. Sin embargo, en el contrato de cesión de crédito de enero de 2018, ya mencionado, la propia aerolínea reconocía la existencia del compromiso.

Por lo demás, hay un hecho que debió impedir a Timaure redactar esta sentencia y hasta provocar su inhibición del caso. Henry Antonio Timaure Colmenares, su hijo, es el director de mantenimiento aeronáutico de Rutaca. La web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) precisa que Timaure Colmenares está en la cabina de la aeronave desde agosto de 2019.

Para su ejecución, la sentencia original a favor de Cuesta debía ser enviada, con sus sellos y firmas, al juzgado de Charbone Pérez en Ciudad Bolívar. Sin embargo, las fuentes consultadas para esta investigación explican que el expediente se extravió en su camino hacia el despacho de la jueza rectora del estado Bolívar, Mercedes Sánchez Rodríguez, a quien se adjalan como una ficha de Timaure y Mendiri. Este hecho irregular está reflejado en el expediente número MP-251725-2022 de la Fiscalía 11.º Contra la Corrupción.

Entonces se inició un intercambio de comunicaciones cuyos términos dejan al descubierto la operación de influencia a favor de Rutaca. El 10 de noviembre, la jueza Charbone Pérez se negó a suspender el embargo sobre Rutaca hasta tanto llegara la sentencia original. Cuatro días después, Sánchez Rodríguez dirigió una comunicación a Charbone en la que se alaba que había recibido la sentencia vía correo electrónico y, por lo tanto, le ordenaba darle ejecución.

La intervención de la jueza rectora no consiguió, sin embargo, extinguir las controversias. De hecho, el 5 de diciembre de 2022, al responder a una solicitud de los representantes legales de Cuesta en la que pedían una explicación lógica de la suspensión de su sentencia y copia certificada de todas las piezas del expediente que por motivos insólitos se encuentra en reconstrucción, la jueza Charbone reiteró que la suspensión del embargo se dio por instrucciones emanadas de la Dra. Mercedes Sánchez Rodríguez, quien le notificó vía telefónica y electrónica sobre la decisión. No obstante, insistió en su criterio de que la ejecución de las sentencias definitivamente firmes emanadas de la sala de casación del TSJ, proceden una vez recibidas en este tribunal dichas actuaciones en original.

Nueve días después, el 14 de diciembre, la Sala Constitucional se declaró competente para revisar la solicitud de revisión constitucional de la defensa de Cuesta Eisler ante la posible transgresión, del debido proceso y la igualdad ante la ley, establecidas en la Constitución. Esto desató un vendaval que se llevó consigo al coronel Rosales Castro, el asistente de Timaure, quien fue removido de su servicio en el TSJ y puesto nuevamente a la orden del Ministerio de la Defensa.

Ida y vuelta de Mendiri

El círculo de amigos y contactos en el petrolero estado de Anzoátegui permitió al Flaco Mendiri incursionar también en negocios como los del petróleo y los seguros.

En 2015, en su posición de Marinos, el abogado hizo un viaje institucional a República Dominicana para estrechar lazos con el equipo de baloncesto de ese país, Soles de Santo Domingo. En las fotos de [portales](#) que reseñaron aquel viaje se ve al abogado acompañado por Nabetse del Valle Vázquez Gómez. Ambos aprovecharon esa estancia para inscribir dos empresas en la isla caribeña: Inversiones Mendiri-Vázquez y Mendiri-Vázquez Petróleo RD, esta última dedicada a la comercialización y distribución de derivados del petróleo.

VÃ¡squez GÃ³mez, tambiÃ©n originaria del estado AnzoÃ¡tegui, figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como integrante de la directiva de cinco empresas que tuvieron contratos en la Faja PetrolÃ­fera del Orinoco. CÃ³mo lo indicÃ³ [Armando.info](https://armando.info) en un reportaje anterior, Nabetse VÃ¡squez estuvo entre los clientes de Eliminalia, una empresa espaÃ±ola de gestiÃ³n de reputaciÃ³n, para intentar borrar informaciÃ³n de internet y redes sociales que la vinculan a los directivos de [Conkor](#), la constructora de Alejandro JosuÃ© Ruiz Mazzeo y ElÃ¡as RamÃ³n Koury Guevara, investigada por el Ministerio PÃºblico por presuntas contrataciones irregulares en la Faja PetrolÃ­fera del Orinoco.

La exfiscal general, ahora en el exilio, Luisa Ortega DÃ­az, asegurÃ³ que Ruiz Mazzeo y Koury Guevara serÃ¡n â??testaferrosâ? de su sucesor y archienemigo, Tarek William Saab. Conkor fue contratista de todo tipo de instituciones pÃºblicas, pero la mayorÃ­a de estos contratos fueron con organismos vinculados a la gobernaciÃ³n de AnzoÃ¡tegui, entre 2006 y 2012, lapso en el que el hoy fiscal general presidÃ­a el ejecutivo regional.

En junio de 2016, VÃ¡squez GÃ³mez fue detenida bajo cargos de trÃ¡fico de sustancias estupefacientes y psicotrÃ³picas y legitimaciÃ³n de capitales, de acuerdo con una sentencia de la [Corte de Apelaciones de AnzoÃ¡tegui](#). Pocos dÃ­as despuÃ©s de su arresto fue puesta en libertad, pues el tribunal considerÃ³ que no habÃ­a pruebas suficientes en su contra. La investigaciÃ³n policial reseÃ±ada en la sentencia, precisa que VÃ¡squez GÃ³mez habÃ­a hecho dos pagos para la estadÃ­a de una embarcaciÃ³n, de nombre *Open Bar*, perteneciente a su pareja, Pedro Luis GarcÃ­a Ramos, en la que se encontraron dos kilogramos de cocaÃ­na. Mendiri Borges fue uno de los abogados que representÃ³ a VÃ¡squez GÃ³mez, su socia en Dominicana, en ese caso.

La aseguradora de las aerolÃ­neas

Una de las peticiones de la consultora jurÃ¡dica de Rutaca, Vicky Valero MÃ©ndez, formulada en noviembre de 2022 a la jueza Charbone PÃ©rez, delata otra conexiÃ³n de la aerolÃ­nea con Mendiri. La abogada pidiÃ³ que el juzgado notificara de la decisiÃ³n de la Sala de CasaciÃ³n Civil a la aseguradora Zuma Seguros, C.A., una compaÃ±Ã­a en la que Mendiri es directivo. A travÃ©s de otras compaÃ±Ã­as venezolanas, Mendiri comparte las acciones de esta empresa, a partes iguales, con JesÃºs Antonio Camargo Morillo. En algunos casos, las compaÃ±Ã­as tenedoras de las acciones de Zuma Seguros son representadas por Renny JosÃ© CalderÃ¡n, quien acompaÃ±Ã³ al abogado en la directiva del equipo de bÃ©isbol profesional Caribes de AnzoÃ¡tegui.

Mendiri, Camargo y CalderÃ¡n han figurado en la directiva de Zuma Seguros CA Corp, una empresa espejo de la venezolana registrada en 2015 en el estado de Florida en Estados Unidos, y todavÃ­a activa. En esta jurisdicciÃ³n, Mendiri constituyÃ³ otra compaÃ±Ã­a mÃ¡s que tambiÃ©n estÃ¡ activa: ZGM Consulting LLC. A estas sociedades se sumÃ³ Jumpopia Development Inc., inscrita en PanamÃ¡ en 2016 y que tiene como primer objeto la realizaciÃ³n de operaciones comerciales y financieras.

El RNC deja en evidencia que, a partir de la llegada de Mendiri, la aseguradora tuvo una buena racha en el negocio de dar cobertura a las flotas de aviones de las aerolÃ­neas venezolanas, entre ellas Rutaca, de su amigo Carlos Silva, y en cuya nÃ¡mina estuvo Mendiri hasta 2016, de acuerdo con el Seguro Social venezolano.

SegÃºn los rastros verificables en el RNC, Zuma Seguros obtuvo otros dos contratos por el mismo concepto con la aerolÃ­nea Avior, entre 2018 y 2019, y con [Turpial Airlines](#), entre 2019 y 2020. Esta

La última aeronave es propiedad del coronel retirado de la Aviación, Pedro del Valle Cestari Navarro, vinculado al mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio, un militar que acumuló gran influencia dentro de la autodenominada Revolución Bolivariana.

Con la llegada de Mendiri, Zuma Seguros también extendió sus servicios al sector petrolero. Por ejemplo, en octubre de 2018 prestó servicios de equipos de pruebas de producción y evaluación de pozos productores a la compañía Petrogas Supply & Services, C.A. y entre marzo de 2019 y 2020 obtuvo un contrato para un servicio de alquiler de taladro para la perforación de pozos de la empresa Petrovictoria -una entidad mixta entre Pdvsa y la rusa Rosneft- con la empresa Taladro Holdings Venezuela, C.A.

armando.info

El protegido del Fisco mueve fichas en el TS

El abogado Gustavo Mendiri se ha convertido en uno de los articuladores del cabildeo dentro del Poder Judicial, con sentencias favorables.



Gladys Gutiérrez
(Presidente de la
Sala Constitucional)

La aseguradora también incurrió en el sector de la construcción. El RNC muestra que en agosto de 2017 la sociedad obtuvo un contrato para la construcción de 250 viviendas multifamiliares en el desarrollo habitacional Ciudad Beltrán, ubicado en la ciudad de Guarenas del estado Miranda, a unos 30 minutos al este de Caracas. Además, fue contratada entre 2019 y 2020 por la empresa Proyectos y Construcciones Orión 1224, C.A. para la ejecución de obras de infraestructura de centrales hidroeléctricas.

Para esta historia se contactó a los representantes legales de Julio César Cuesta Eisler, quienes declinaron dar declaraciones indicando que prefieren limitar sus acciones al campo jurídico. También se enviaron cuestionarios a correos institucionales de Mendiri y de la empresa Rutaca, pero no se recibió respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.

Dos de las fuentes del sector judicial indican que hace dos años Mendiri se vio obligado a salir del país debido a acusaciones en su contra relacionadas con su trabajo tras bastidores en los tribunales. Pero regresó a Venezuela con la venia de Tarek William Saab, quien no activó ningún procedimiento judicial en su contra.

A Mendiri no le tomó mucho tiempo retomar sus contactos en los despachos judiciales venezolanos, como evidencia el caso de Rutaca. Ahora ambas partes están a la espera de lo que decida la Sala Constitucional, con el curioso preámbulo de que la magistrada encargada de redactar el [fallo](#) en el que la Sala se declaró competente para revisar la sentencia de Timaure no fue Gladys Gutiérrez, sino Michel Adriana Velásquez Grillet, magistrada que en redes sociales asocian a la tribu de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Será esta magistrada la que tenga la palabra final en la disputa judicial, pero independientemente del desenlace jurídico de esta historia, el Flaco ya demostró que en el Tribunal Supremo el tráfico de influencia sigue teniendo alas.

Una sentencia dejó al des al consigliere del TSJ

La sentencia del 3 de noviembre de 2022 redactada por el magistrado de la Sala de Casación Civil, Henry Timoteo, dejó una estela de irregularidades que conducen a un error de influencia articulado por el abogado Gustavo M...



De acuerdo con lo indicado por el empresario Julio César Cuesta Eisler, en testimonios registrados en decisiones judiciales, él y el entonces vicepresidente de Rutaca, Eugenio Molina Anaya, **llegaron a un acuerdo por el que este último se comprometía a venderle un avión por 2,5 millones de dólares**, a través de un esquema de pagos espaciados.

Fecha de creación
2023/10/08

armando.info